

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

28ª REUNION — Continuación de la 10ª SESION ORDINARIA —

OCTUBRE 26 DE 1994

Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri
y Carlos Alberto Romero

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

DIPUTADOS PRESENTES:

ABIHAGGLE, Carlos Enrique
ACEROLAZA, Florencio Gilberto
ACHEM, Antonio
ADAIÑE, Felipe Teófilo
ALBAMONTE, Alberto Gustavo
ALBERTI, Juan Carlos
ALCALA, Néstor Ricardo
ALENDE, Oscar Eduardo
ALGABA, Ernesto Pablo Andrés
ALSOGARAY, Alvaro Carlos
ALVAREZ, Carlos Alberto
ALVAREZ, Carlos Raúl
ALVAREZ, GARCÍA, Normando M.
ARAGONES de JUÁREZ, Mercedes
ARANDA, Saturnino Dantti
ARGÜELLO, Jorge Martín Arturo
ARIAS, César
ARMENDÁRIZ, Alejandro
ARRECHEA, José Salvador
AYALA, Susana Beatriz
AYETZ, Liliana
BALESTRA, René Helvecio
BALESTRINI, Alberto Edgardo
BALESTRINI, Miguel Alberto
BALTER, Carlos Mario
BARBERA, Eliseo
BARBOTTI, Attilio Ector
BAUM, Daniel
BECERRA, Nicolás Eduardo
BENEDETTI, Jorge Enrique
BENZI, María Cristina
BERMÚDEZ, María del Pilar
BIANCHI SILVESTRE, Marcela
BONINO, Miguel Angel
BORDA, Osvaldo
BRACCHI, Osvaldo Américo
BRANDA, Carlos Ernesto
BRAVO, Alfredo Pedro
BRESER, Adalberto Edgardo
BRUNELLI, Naldo Raúl A.
BRUZZO, Omar Obdulio
BULLRICH, Patricia
BUSSI, Antonio Domingo
CABIRÓN, Juan Carlos
CALLABA, Anibal
CAMAÑO, Eduardo Oscar
CAMARA, Mario Miguel
CASTILLO, José Luis
CASTRO, Carlos José
CEBALLOS, Walter Alberto
CLOSS, Ramón Alberto

CORCHUELO BLASCO, José Manuel
CROSTELLI, Juan Carlos
D'AMBROSIO, Angel Mario
DAUD, Jorge Carlos
D'ELIA, Roberto Antonio
DEL FABRO, Lillian del Carmen
DELLEPIANE, Carlos F.
DÍAZ MARTÍNEZ, Jorge Raúl
DIGÓN, Roberto Secundino
DI TULLIO, Héctor Horacio
DONNI, Luisa Cristina
DRISALDI, María Rita
DUMÓN, José Gabriel
DURANONA y VEDIA, Francisco de
DURRIEU, Marcela Margarita
ESCOBAR, Jorge Alberto
ESTÉVEZ BOERO, Guillermo E.
FABRISSIN, Carlos Alberto
FALLETI, Julio César José
FELGUERAS, Ricardo E.
FERNANDEZ GILL, Guillermo Carlos
FERNANDEZ MEIJIDE, Graciela
FIGUEROA, Pedro Octavio
FOLLONI, Jorge Oscar
FRAGOSO, Francisco Ulises
FUNES, Carlos Delcio
GALVAN, Raúl Alfredo
GALLO, Orlando Juan
GARAY, Nicolás Alfredo
GARCÍA MORENO, Miguel Angel
GAUNA, Juan Octavio
GAZIA, Rodolfo Maurieto
GIMÉNEZ, Défor Abel
GIMÉNEZ, Ramón Francisco
GIOJA, José Luis
GOLPE, Carlos Horacio
GÓMEZ CENTURION, Carlos E.
GONZÁLEZ CABANAS, Tomás W.
GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan H.
GRANADOS, Dulce
GREEN, Gustavo Adolfo
GUERRERO, Luis Serafin
HARDY, Anibal Osvaldo
HERRERA, Bernardo Eligio
HERRERA ARIAS, Manuel H.
HUMADA, Raúl
IBARBÍA, José María
IBARRECHE, Julio César
ITURRE, César E. del Valle
JAUNARENA, José Horacio
JUNCOSA, Rodolfo Aldo
KAHLER, Ernesto Rolando
KAMMERATH, Germán Luis

KELLY, Elsa Diana Rosa
KESSLER, Ana Raquel
KOTH, Carlos
LAFALLA, Arturo Pedro
LAHOZ, José Fernando
LAMBERTO, Oscar Santiago
LARRABURU, Dámaso
LECONTE, Ricardo Guillermo
LEGUIZAMÓN, María Laura
LÓPEZ, Alcides Humberto
LÓPEZ, José Augusto
LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
LOSADA, Luis Enrique
LYNCH, Carlos Alberto
LLOPIS, Enrique Raúl
MACEDO, Horacio Antonio
MACHADO, Oscar Alfredo
MAIDANA, Elsa I.
MANFREDOTTI, Carlos
MAQUEDA, Juan Carlos
MARCOS, Ricardo Ernesto
MARTÍNEZ, Esteban
MARTÍNEZ, Manuel Luis
MARTÍNEZ, Silvia Virginia
MARTÍNEZ GARBINO, Emilio E.
MATHOV, Enrique José
MATZKIN, Jorge Rubén
MENDOZA, Claudio Ramiro
MENDOZA, Martín
MENEHINI, Javier Reynaldo
MENEM, Carlos Omar
MERCADER, Martha Evelina
MICHELLI, Marco Aurelio
MICHITTE, Salomón Antonio
MIRALLES de ROMERO, Norma
MOLINAS, Ricardo Francisco
MOREAU, Leopoldo Raúl
MORELLO, Emilio Pedro
MULLER, Mabel Hilda
MUNIAGURRIA, Marcelo Julio
MUNOZ, Marcelo Bernardo
NACUL, Miguel Camel
NATALE, Alberto Adolfo
NEDER, Jorge Humberto
NIEVA, Alejandro Mario
NIÑO, Jorge
NOVAU, Pedro José
OLIVERA, Enrique José
PARADA, Alberto
PARAJÓN, José María
PASCUAL, Rafael Manuel
PATTERSON, Ricardo Ancell
PELAEZ, Víctor

PELLIN, Osvaldo Francisco
PEPE, Lorenzo Antonio
PERALTA, Aníbal Pedro
PÉREZ, Jorge Telmo
PERRINI, Gioconda E.
PESCE, Félix
PICCININI, Ana Ida
PICCHETTO, Miguel Ángel
PIERRI, Alberto Reinaldo
PINTO, Guillermo
POLINO, Héctor Teodoro
PRAT, Alfredo Ernesto
RE, Ricardo Horacio
RICO, Aldo
RODRIGO, Esteban Joaquín
RODRIGUEZ, Jesús
RODRIGUEZ, Mabel E.
RODRIGUEZ SAÑUDO, Hugo B.
ROGGERO, Humberto Jesús
ROIG, Ángel
ROJO, Rubén Darío
ROMERO, Carlos Alberto
ROMERO, Humberto Antonio
ROY, Irma
RUBINI, Mirta Elsa
RUIZ PALACIOS, José David
SAADI, Ramón Eduardo
SALINO, María Antonia
SAMPIETRO, Darci
SANTÍN, Eduardo
SCELZI, Carlos José
SMITH, Santos
SOBRINO, Margarita María
SOLANAS, Fernando E.
SORIA, Carlos Ernesto
SPINOSA, Augusto Juan
SUEIRO, Carlos Adolfo
TENEV, Carlos
TEODOSIU, Jorge Nicolás

TERRAGNO, Rodolfo Héctor
TOMA, Miguel Ángel
TOPA, Raúl Roque
TOTO, Francisco Patricio
TRETTEL MEYER, Raúl
USANDIZAGA, Horacio Daniel
VALCARCEL, Juan Manuel
VARELA, Néstor Ángel
VENESIA, Gualberto Edgardo
VICCHI, Raúl Horacio
VIGLIONE, Atilio Oscar
VITAR, José Alberto
ZAVALLA, José Luis
ZICARELLI, Orlando A.
ZUCCARDI, María Cristina

AUSENTES, EN MISION OFICIAL:

NEGRI, Mario Raúl
TOGNI de VELY, Adriana Leonor

AUSENTES, CON LICENCIA:

FAYAD, Víctor Manuel
ORGAZ, Carlos Alfredo
SCHIARETTI, Juan

AUSENTES, CON SOLICITUD DE LICENCIA PENDIENTE DE APROBACION DE LA HONORABLE CAMARA

ALVAREZ, ECHAGUE, Raúl Ángel
ANTELO, José María
BARRIONUEVO, Eduardo E.
CASTILLO, Oscar Aníbal
FLORES, Rafael Horacio
GALANTE, Pedro Jorge

GONZÁLEZ, Antonio Erman
MERCADO LUNA, Ricardo Gastón
PERNASSETTI, Horacio F.
SEBASTIANI, Claudio A.
SUCARIA, Neyer
TROYANO, Silvia Elena
VARELA CID, Eduardo

AUSENTES, CON AVISO:

ABASTO, Ángel Leónidas
BECERRA, Carlos Armando
BERHONGARAY, Antonio Tomás
BISCHOF, Enrique Alberto
BONOMI, Silvia Mónica
CAMPERO, Rodolfo Martín
CARCA, Elisa Beatriz
CASARI de ALARCIA, María Leonor
CERDERA, Rogelio Rafael
D'ALESSANDRO, Miguel Humberto
GOLPE, Néstor Lino
GUZMAN, María Cristina
HERNÁNDEZ, Antonio María
MARCOLLI, Juan Miguel A.
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MOLARDO, Elvio Francisco
MONTIEL, Sergio Alberto
MURIEL, Néstor Jorge
ORQUIN, Leopoldo Manuel
ORTIZ MALDONADO, Gastón H.
PAROLA, José María
POLO, Luis Nicolás
RODRIGUEZ, José
SANCHEZ GALDEANO, Roque
SARQUIZ, José Alberto
STORANI, Federico
VAZQUEZ, Roberto
VAZQUEZ, Silvia Beatriz

— La referencia acerca del distrito, bloque y período del mandato de cada señor diputado puede consultarse en el Diario de Sesiones correspondiente a la sesión preparatoria de fecha 11 de mayo de 1994.

SUMARIO

1. Continúa la consideración de la moción formulada por el señor diputado Moreau de que se trate sobre tablas el asunto al que se refiere el número 2 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 2649.)
2. Consideración del proyecto de resolución de los señores diputados Santín y Moreau por el que se solicitan informes verbales al señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos acerca de sus declaraciones relacionadas con la crisis económico-financiera del Sistema Nacional de Seguridad Social (4.402-D.-94). Se sanciona. (Pág. 2650.)
3. Moción de orden formulada por el señor diputado Matzkin de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento y moción de tratamiento sobre tablas del asunto al que se refiere el número 4 de este sumario. Se aprueban ambas proposiciones. (Pág. 2651.)
4. Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación Penal en los proyectos de ley de los señores diputados Rodríguez Sañudo (2.123-D.-93), Bischof (3.702-D.-93) y Albamonte (4.332-D.-94) y en el proyecto de ley en revisión (78-S.-94) sobre la libertad por agotamiento de los plazos de la prisión preventiva. Se sanciona. (Pág. 2651.)

5. Autorización a la Presidencia para comunicar las sanciones producidas en el transcurso de la sesión. (Pág. 2665.)
6. Moción de orden formulada por el señor diputado Novau de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento y moción de tratamiento sobre tablas de los asuntos a los que se refieren los números 13 y 14 de este sumario. Se posterga la votación. (Pág. 2665.)
7. Manifestaciones del señor diputado Di Tulio de beneplácito por el fallo del laudo arbitral sobre Laguna del Desierto. (Pág. 2666.)
8. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Fernando Gil con motivo del trato de que fuera objeto por parte del personal de la aduana chilena (4.563-D.-94). Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. 2666.)
9. Continúa la consideración de los dictámenes de las comisiones de Comercio, de Finanzas, de Legislación Penal y de Legislación General en el proyecto de ley de los señores diputados Kammerath (1.258-D.-94), Balestrini (M. A.) (2.300-D.-94), Becerra (N. E.) (2.463-D.-94) y Abihaggle y otros (2.472 y 2.473-D.-94), sobre régimen del cheque. Se sanciona. (Pág. 2666.)

XXV. Dictamen de la Comisión de Legislación Penal en el proyecto de ley del señor diputado Pascual y otros por el cual se incorpora al Código Penal el delito de intrusión (1.075-D.-94). (Pág. 2732.)

XXVI. Dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de declaración de la señora diputada Rubini por el que se declara de interés nacional la realización de las VI Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal a realizarse en Junín, provincia de Buenos Aires (3.028-D.-94). (Pág. 2734.)

XXVII. Dictamen de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora diputada Rubini por el que se declara de interés nacional el VII Simposio Internacional de Veterinarios de Laboratorios de Diagnóstico, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires (3.196-D.-94). (Pág. 2734.)

XXVIII. Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el proyecto de declaración del señor diputado Pérez (J. T.) por el que se declara de interés nacional la IV Convención Nacional de Floristas (Convenflor 94), a realizarse en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires (3.848-D.-94). (Pág. 2735.)

XXIX. Dictamen de las comisiones de Legislación General, de Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el convenio suscrito entre el señor ministro de Defensa y el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires sobre cesión a la citada provincia de inmuebles integrantes del Complejo Industrial Ramallo-San Nicolás (Comisa) (39-P.E.-93). (Pág. 2736.)

XXX. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de declaración de la señora diputada Sobrino y otros por el que se declara de interés legislativo el VI Festival Latinoamericano de Teatro, a realizarse en la provincia de Córdoba (4.104-D.-94). Se sanciona como resolución. (Página 2745.)

XXXI. Pronunciamiento de la Honorable Cámara sobre los asuntos a los que se refieren los números 15.I a 15.XXX de este sumario. Se sancionan. (Pág. 2746.)

B. Asuntos entrados:

- Proyectos de ley. (Pág. 2767.)
- Proyectos de resolución. (Pág. 2767.)
- Proyectos de declaración. (Pág. 2767.)

C. Inserciones solicitadas por los señores diputados:

1. Balestrini (M. A.). (Pág. 2768.)
2. Olivera. (Pág. 2790.)
3. Antelo. (Pág. 2791.)
3. Juncosa. (Pág. 2792.)
5. Caray. (Pág. 2793.)
6. Rodríguez Sañudo. (Pág. 2795.)

—En Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de octubre de 1994, a la hora 17 y 15:

I

MOCION DE SOBRE TABLAS

(Continuación)

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa la sesión. Ha quedado pendiente de la reunión anterior la decisión respecto de la moción de tratamiento sobre tablas, formulada por el señor diputado Moreau, del proyecto de resolución de los señores diputados Santín y Moreau (expediente 4.402-D.-94) por el que se solicitan informes verbales al señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos acerca de sus declaraciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social.

Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — El bloque Justicialista apoyará el tratamiento sobre tablas y también votará favorablemente dicha iniciativa. Sin embargo, vamos a formular algunas precisiones al respecto. Nuestra intención es que la invitación al señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos se concrete en una sesión especial que celebrará el cuerpo el martes de la semana próxima a las 16.

Asimismo deseo aclarar que, si bien estamos dispuestos a votar afirmativamente este proyecto, nuestro apoyo obviamente se limita a su parte resolutive; expresamos nuestro total y absoluto desacuerdo con sus fundamentos.

10. Apéndice:

A. Sanciones de la Honorable Cámara. (Página 2746.)

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración. Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda sancionado el proyecto de resolución¹.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

3

**MOCION DE ORDEN
Y MOCION DE SOBRE TABLAS**

Sr. Matzkin. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: he solicitado la palabra con el objeto de formular una moción de apartamiento del reglamento a fin de poder tratar sobre tablas el dictamen de la Comisión de Legislación Penal, contenido en el Orden del Día N° 799, sobre libertad de los procesados por agotamiento de los plazos de la prisión preventiva.

Este es un proyecto que requiere la atención de la Honorable Cámara dada la profundidad e importancia de su contenido. Se trata de una iniciativa que está en línea con la sanción de la nueva Constitución y de pactos internacionales a los que la República Argentina ha adherido sin limitaciones de naturaleza alguna.

En base a lo expresado, solicito que la Presidencia ponga a consideración de esta Honorable Cámara la petición que acabo de formular.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar la moción de apartamiento del reglamento formulada por el señor diputado por La Pampa. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas del asunto al que acaba de hacer referencia el señor diputado Matzkin.

Se va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda aprobada la moción y en consecuencia se incorpora la consideración del asunto al orden del día de la presente sesión.

La Presidencia advierte a los señores diputados que la aprobación de la moción de tratamiento sobre tablas del señor diputado Matzkin supone la inmediata consideración del proyecto al que se ha referido, habida cuenta de que en la reunión pasada se dispuso el pase a cuarto intermedio mientras se estaba debatiendo el dictamen sobre régimen del cheque.

Sr. Matzkin. — La intención de la moción ha sido precisamente que el proyecto al que he aludido se trate inmediatamente.

4

**LIBERTAD POR AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS
DE LA PRISION PREVENTIVA**

Sr. Presidente (Pierri). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación Penal en los proyectos de ley sobre libertad por agotamiento de los plazos de la prisión preventiva (expedientes 2.123-D.-93, 3.702-D.-93, 4.332-D.-94 y 78-S.-94).

(Orden del Día N° 799)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación Penal ha considerado el proyecto de ley venido en revisión y los proyectos de ley de los señores diputados Rodríguez Sañudo; Bischof y Albamonte; y ha tenido a la vista el proyecto del señor diputado Hernández, todos referidos a la libertad de los procesados por agotamiento de los plazos de la prisión preventiva; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

**LIBERTAD POR AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS
DE LA PRISION PREVENTIVA**

Artículo 1º — La prisión preventiva no podrá ser superior a dos años. No obstante, cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de los mismos hayan impedido la finalización del proceso en el plazo indicado, éste podrá prorrogarse un año más por resolución fundada.

Art. 2º — Los plazos previstos en el artículo precedente serán prorrogados por seis meses más cuando los mismos se cumplieren mediando sentencia y ésta no se encontrare firme.

Art. 3º — El ministerio público podrá oponerse a la libertad del imputado cuando entendiera que existieron de parte de la defensa articulaciones manifiestamente dilatorias y el tribunal deberá resolver la cuestión dentro del plazo de cinco días.

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 2766.)

En las causas que se inicien a partir de la vigencia de la presente ley, el ministerio público solamente podrá formular aquella oposición, si hubiera advertido al tribunal acerca del carácter dilatorio de la articulación de que se trate, en la oportunidad de tomar conocimiento de la misma.

Art. 4º — No mediando oposición o cuando ésta fuese rechazada el imputado recuperará la libertad bajo la caución que el tribunal determine.

Si la oposición fuese aceptada, no se computarán las demoras causadas por aquellas articulaciones.

Art. 5º — En el acto de prestar la caución el imputado deberá fijar domicilio, denunciando el real y las circunstancias de trabajo que pudieren imponerle la necesidad de ausentarse por más de veinticuatro horas, lo que no podrá ser alterado sin autorización del tribunal.

Además, el tribunal establecerá las reglas de conducta que deberá cumplir el imputado conforme las previsiones del artículo 27 bis del Código Penal y que resulten compatibles con su situación procesal.

Art. 6º — El auto que dispuso al libertad será revocado cuando el imputado no cumpla con las reglas que se le impusieron o no compareciere al llamado del tribunal sin causa justificada. En todos los casos, previamente, el tribunal fijará un término no superior a los quince días para que el imputado cumpla con sus obligaciones con el apercibimiento de revocación.

Art. 7º — Transcurrido el plazo de dos años previsto en el artículo 1º, se computará por un día de prisión preventiva, dos de prisión o reclusión.

Art. 8º — Modifícase el artículo 24 del Código Penal para los casos comprendidos en esta ley.

Art. 9º — La presente ley es reglamentaria del artículo 7º, punto 5º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y será de aplicación en todo el territorio de la Nación.

Art. 10. — Esta ley regirá a los treinta días de su publicación.

Art. 11. — Quedan expresamente excluidos de los alcances de la presente ley los imputados por el delito previsto en el artículo 7º de la ley 23.737 y aquellos a quienes resultaren aplicables las agravantes previstas en el artículo 11 de la misma ley.

Art. 12. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 18 de octubre de 1994.

Juan O. Gauna. — Miguel A. Pichetto. — Antonio Aohem. — Alberto G. Albamonte. — Susana B. Ayala. — Rogelio R. Cerdera. — Francisco U. Fragoso. — Tomás W. González Cabañas. — Juan M. Marcolli. — Manuel L. Martínez. — Javier R. Meneghini. — Carlos O. Menem. — Ricardo F. Molinas. — Jorge H. Nader. — Eduardo Varela Cid.

En disidencia parcial:

Orlando J. Gallo. — Alcides H. López.

INFORME

Honorable Cámara:

El presente proyecto de ley tiene por objetivo fijar un período de tiempo razonable para que un imputado por delito penal obtenga una sentencia en un plazo de dos años. El mismo se estima suficiente para que la Justicia lleve adelante el proceso y dicte la sentencia definitiva.

Esta iniciativa determina legislativamente el plazo razonable (2 años) para que el imputado recupere la libertad. Tal iniciativa está avalada por el artículo 7º, inciso 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, actualmente vigente en la Constitución reformada en el presente año.

No obstante se ha previsto que cuando se trate de causas que revistan suma gravedad o de evidente complejidad, la Cámara correspondiente podrá ampliar el plazo por un año más.

Asimismo, el ministerio público podrá oponerse a la libertad del imputado cuando considere que la defensa realizó articulaciones manifiestamente dilatorias. El tribunal resolverá en un plazo de cinco días, sobre tal oposición.

Consideramos que este proyecto trata de acercarse al difícil equilibrio entre libertad y seguridad, posibilitando la libertad de procesados sin condena cuya detención se haya prolongado excesivamente, aunque se ha tratado de evitar incluir aquellos casos relacionados con la aplicación de la Ley de Lucha contra el Narcotráfico, que constituyen situaciones de extrema gravedad. La Justicia debe velar por la vigencia de los derechos humanos dentro del sistema carcelario, de manera que ningún ciudadano permanezca detenido un día más de lo que corresponda. Es sabido que la solución del problema de las cárceles no pasa únicamente por el Poder Legislativo, el que no obstante ya ha dado importantes instrumentos legales, como la sanción de *probation*, está tratando actualmente el proyecto de "penas alternativas", y se dictamina el presente luego de extensas deliberaciones.

También es necesario que desde el Poder Ejecutivo se asigne mayor presupuesto para lograr contar con establecimientos carcelarios que permitan cumplir con el principio constitucional que establece que las cárceles deberán ser "sanas y limpias" (artículo 18, de la Constitución Nacional), y cuya función no es el castigo, sino la resocialización del detenido.

Estas y otras consideraciones que se expondrán ante vuestra honorabilidad nos llevan a solicitar la aprobación del proyecto que se somete a vuestra consideración.

Juan O. Gauna.

ANTECEDENTES

1

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Incorpórase al artículo 317 del Código Procesal Penal de la Nación, ley 23.984, el siguiente texto al final:

Inciso 6º: Cuando el tiempo total de detención supere los dos años.

Inciso 7º: Cuando las condiciones de detención no reúnan los requisitos establecidos en el artículo 313 de este código y el juez de ejecución estime este incumplimiento como de extrema gravedad.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Hugo Rodríguez Sañudo.

2

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, e.c.

Artículo 1º — Agréguese como artículo 312 bis de la ley 23.984 el siguiente:

Cesación

Artículo 312 bis: Si el juez estimare prima facie que el imputado no se le privará de su libertad en caso de condena por un tiempo no mayor al de la prisión sufrida, aun por aplicación del artículo 13 del Código Penal, dispondrá por auto la cesación del encarcelamiento y la inmediata libertad de aquél.

Cuando se dicte por el juez de instrucción el auto que conceda o deniegue la liberación será apelable conforme lo previsto en el artículo 322.

Art. 2º — Sustitúyese el artículo 316 de la ley 23.984 por el siguiente:

Artículo 316: Toda persona que se considere imputada por un delito, en causa penal determinada, cualquiera sea el estado en que ésta se encuentre, podrá por sí o por terceros, solicitar al juez que entiende en aquélla su exención de prisión.

El juez calificará el o los hechos de que se trate, y deberá concederle la exención de prisión al imputado, cuando pueda estimar prima facie que, en caso de ser condenado por los delitos que se le atribuyen, no se lo privará de su libertad por más de ocho meses, aun por aplicación del artículo 13 del Código Penal.

Si el juez fuere desconocido, el pedido podrá hacerse al juez de turno, quien determinará el juez interviniente y le remitirá, si correspondiere, la solicitud.

Art. 3º — Sustitúyase el artículo 317 de la ley 23.984 por el siguiente:

Artículo 317: La excarcelación deberá concederse:

1. En los supuestos que correspondiere la exención de prisión.
2. Cuando el tiempo total de detención preventiva supere los dos años.
3. Cuando las condiciones de detención no reúnan los requisitos establecidos en el artículo 313 de este código.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Enrique Bischof.

3

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Agréguese como artículo 312 bis a la ley 23.984 (Código Procesal Penal de la Nación) el siguiente:

La prisión preventiva no podrá durar más de dos años. En los casos de procesos voluminosos el juez o tribunal podrá extender el plazo hasta un año más por resolución fundada, pudiendo proceder como lo autoriza el artículo 43.

Art. 2º — Agréguese como segundo párrafo del artículo 43 de la ley 23.984 (Código Procesal Penal de la Nación) el siguiente:

Cuando por la cantidad de hechos que se impute a un procesado detenido determine un grave retardo en la resolución de su situación procesal, el juez, previa vista al fiscal y querella, podrá ordenar la separación de uno o más hechos para su juzgamiento independiente.

Art. 3º — Agréguese el artículo 317 del Código Procesal Penal de la Nación y como inciso 6º el siguiente:

Cuando el imputado haya pasado en prisión preventiva el término establecido en el artículo 312 bis, más su prórroga si la hubiere, el tribunal, juez o fiscal interviniente, deberán informar de inmediato al Consejo de la Magistratura el hecho y las causas de la demora.

Art. 4º — Las causas con detenidos en prisión preventiva que tramiten bajo el régimen de la ley 2.372 y se encuentren en la etapa sumarial pasarán a tramitar de inmediato bajo el régimen de la ley 23.984, debiendo entrar a debate dentro del término de seis meses a partir de la sanción de esta ley.

Si la causa se encuentra en la etapa plenaria seguirá tramitando por la ley 2.372 pero la sentencia de primera instancia deberá ser dictada dentro del mismo plazo.

El incumplimiento de esta norma será considerada falta grave para los fiscales, jueces y miembros del tribunal que las incumplan.

No se computarán dentro de estos términos, las diligencias solicitadas por la defensa que sean improcedentes y notoriamente destinadas a dilatar el proceso. Tampoco se computarán los plazos cuando la causa sea remitida a la alzada por recurso ordinario o extraordinario.

Art. 5º — La presente ley es reglamentaria del artículo 7º, punto 5º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por ley 23.054, e incorporada a la Constitución Nacional, y será de aplicación en todo el territorio de la Nación.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Alberto G. Albamonte.

4

Buenos Aires, 1º de septiembre de 1994.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto R. Pierrí.

S/D.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Agrégase como segundo párrafo del artículo 24 del Código Penal de la Nación el siguiente:

Si el procesado cumpliera dos años de prisión sin que se le hubiere dictado sentencia, se computará a partir de este plazo, por cada día de prisión preventiva, dos (2) de prisión o reclusión.

Art. 2º — Agrégase a continuación del artículo 315 del Código Procesal Penal de la Nación el siguiente:

Duración

Artículo 315 bis: La prisión preventiva del procesado no excederá de dos (2) años. Sin embargo el tribunal competente, mediante requerimiento fundado, podrá solicitar por única vez a la Cámara Nacional de Casación Penal, la que en un plazo no mayor de diez (10) días deberá expedirse, una prórroga que no podrá ser superior de seis (6) meses. Una vez vencida la prórroga el tribunal deberá resolver definitivamente la situación procesal y proceder a su inmediata libertad, sin perjuicio de otras medidas cautelares que correspondan.

Art. 3º — Agrégase como inciso 6 del artículo 317 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984) el siguiente:

Inciso 6: Cuando el imputado hubiere cumplido dos (2) años de prisión preventiva.

Art. 4º — El tribunal competente resolverá la situación procesal de quienes al momento de entrar en vigencia esta ley estén cumpliendo prisión preventiva en los siguientes plazos:

1. En un (1) año si el tiempo de prisión preventiva es menor a dos (2) años.
2. En seis (6) meses si el tiempo de prisión preventiva es mayor a dos (2) años.

Las disposiciones del artículo 2º de la presente ley se aplicarán a los procesos sustanciados bajo el régimen de la ley 2.372.

Art. 5º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

EDUARDO MENEM.
Edgardo R. Piuzei.

Sr. Presidente (Pierrí). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gauna. — Señor presidente: en mi carácter de presidente de la Comisión de Legislación Penal voy a informar a la Honorable Cámara acerca del dictamen contenido en el Orden del Día Nº 799, vinculado a los plazos de la prisión preventiva, con lo cual anticipo que vamos a solicitar la modificación del título que lleva el proyecto en análisis por el de "Plazos de la prisión preventiva".

Este dictamen ha sido producto de un gran empeño llevado a cabo en el seno de la comisión que presido, donde hemos tomado conocimiento del proyecto venido en revisión en septiembre de este año, y de las iniciativas de los señores diputados Rodríguez Sañudo, Bischof, Albamonte y Antonio Hernández.

A partir de allí, y en la búsqueda de un dictamen único que contemplara todos los aspectos vinculados a esta cuestión de relevancia dentro de la problemática judicial y carcelaria argentina, los señores diputados Pichetto y Frangoso hicieron un gran esfuerzo intelectual a fin de elaborar este despacho en común que ahora se presenta a la consideración del cuerpo y que intentaremos mejorar durante la discusión en particular, aunque sólo desde el punto de vista de la técnica legislativa.

Destaco que no se trata de una cuestión meramente coyuntural sino de ir perfilando el establecimiento de una política criminal en el Estado de derecho que asegure que el sacrificio de la libertad individual tenga un límite de tiempo que sea razonable y que permita que no exista la incertidumbre en aquel que se ve privado de la libertad y sometido a proceso penal.

Con esto quiero significar —y solicito a los señores diputados que guarden silencio en orden a la trascendencia del tema— que estamos planteando un problema que se advierte de absoluta tensión en el derecho público, como es el de la libertad y la autoridad, la seguridad individual y la colectiva. Por ende tiene trascendencia el debate que se propone hoy tendiente a asegurar ambas ecuaciones, es decir, tanto la libertad individual como la libertad o seguridad colectiva.

Por otro lado, el Parlamento debe responder adecuadamente a las exigencias contenidas en el artículo 7º de la Convención Americana de los Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por

la ley 23.054, que fue sancionada en 1984. Además, dicho Pacto ha sido incorporado a la Constitución Nacional por la reforma de 1994.

Es necesario fijar legalmente un tiempo de duración de la prisión preventiva teniendo en cuenta los antecedentes que existen en relación con el derecho a la libertad personal —artículo 7º del Pacto—, donde se establece que toda persona deberá tener en tiempo razonable una sentencia que ponga fin a la incertidumbre de su proceso penal.

Sr. Presidente (Pierri). — Disculpe la interrupción, señor diputado, pero quiero solicitar con todo respeto a los señores legisladores que guarden silencio. Todas las semanas tengo que reiterar este pedido. Parecería que algunos señores diputados vinieran al recinto a hablar por sus teléfonos celulares, lo cual me obliga a pedirles que respeten al orador. Quienes deban entablar una comunicación telefónica pueden hacerlo fuera del recinto; de lo contrario, estarán obstaculizando la labor de los taquígrafos, quienes no pueden oír lo que dice el señor diputado que está en el uso de la palabra. Por lo tanto ruego a los presidentes de bloque que soliciten a los señores diputados que suspendan el uso de los teléfonos celulares en el recinto. (*Aplausos.*)

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gauna. — Decía, señor presidente, que frente a este Pacto incorporado en la propia Constitución Nacional en 1994, estando en juego el término de la libertad personal, la presunción de inocencia y el derecho de defensa en juicio —artículo 18—, propiciamos este proyecto de ley que reglamenta el artículo 7º del Pacto de San José de Costa Rica.

Como plazo específico proponemos dos años, pudiendo ampliarse únicamente cuando el procesado tenga distintos procesos o por la complejidad jurídica del esclarecimiento del proceso. En estos casos el plazo podrá prorrogarse por un año más, pero deberá ser por una decisión fundada del juez, quien inmediatamente deberá poner la medida en conocimiento del tribunal de apelación que correspondiere para su debido contralor. Esto significa que aquellos jueces que por la complejidad o cantidad de procesos que tienen a su cargo consideren imprescindible prorrogar por un año la prisión preventiva, tendrán que hacerlo en forma fundada, poniendo en conocimiento de los tribunales superiores la decisión para que éstos procedan a realizar el correspondiente contralor y observar cómo los jueces están manejando los plazos, de modo

de establecer lo antes posible el cese de la incertidumbre que provoca el proceso penal.

Asimismo, el proyecto en consideración determina que en aquellos casos en que la prisión preventiva exceda de dos años, debe utilizarse un cómputo especial, modificándose para estos supuestos el artículo 24 del Código Penal. De este modo, por cada día de prisión preventiva posterior a los dos años se computarán dos días de condena.

Todos queremos que las sentencias se dicten en plazos razonables porque ello tiene que ver con una adecuada prestación del servicio judicial penal, eliminando la incertidumbre que se le crea a una persona por el hecho de estar bajo proceso. Se puede dar el caso de que una persona esté sacrificando su libertad esperando que el Estado dicte la correspondiente sentencia. Este sacrificio de la libertad individual —en este caso, la del procesado— se funda en la obligación del Estado de preservar la seguridad colectiva, pero tiene como restricción el deber de dictar la sentencia en un tiempo adecuado, que es lo que estamos propiciando con este proyecto de ley.

Este proyecto de ley se inscribe en la transición que significa la coexistencia en el proceso penal de lo que era el añejo proceso escriturario con el juicio oral. Por ende, en la medida en que no se opte por el juicio oral, se mantiene el proceso escriturario que es el que generalmente complica la situación y provoca demoras en los jueces para dictar las sentencias.

Este proyecto de ley que estamos considerando se inserta en esa transición a la que hice mención, aunque en el futuro no va a ser la norma ideal sino la norma posible frente a una realidad judicial y a una realidad carcelaria que todavía claman una definición concreta para poder decir que realmente estamos viviendo en un estado de derecho.

Los tres órganos del poder de autoridad del Estado tienen que comprometerse en una acción conjunta e ineludible, porque no habrá soluciones en este tema judicial y penal si cada uno de esos órganos no trabaja mancomunadamente para ver cómo se soluciona este grave problema que afecta al estado de derecho.

Hoy el Poder Legislativo está dando una respuesta a un problema de esta realidad circunstancial que vivimos; también está en estudio la búsqueda de un sistema de penas alternativas —como la prisión domiciliaria—, a fin de reducir la población carcelaria, que vive en condiciones infrahumanas.

Además, el órgano ejecutivo tendrá que terminar con el cuento de la buena pipa en cuanto a que no invertimos en cárceles obsoletas porque se piensa construir cárceles nuevas. Pero resulta que como no hacemos cárceles nuevas tampoco invertimos en las obsoletas, y estamos soportando este drama fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires y en el ámbito de la primera provincia argentina.

El Poder Ejecutivo debe saber que corresponde realizar una inversión en esta materia, porque la Constitución habla de cárceles sanas y limpias. ¡Qué lejos estamos de eso en este año 1994!

El Poder Ejecutivo debe saber también que, más allá de lo contable, está en juego la seguridad jurídica y la seguridad individual de los ciudadanos y habitantes de esta Nación, que al no tener una sentencia viven miserablemente en cárceles abandonadas.

No digo que ése sea un problema de hoy, ya que lo venimos arrastrando de décadas. De una vez por todas debemos tomar el toro por las astas y encontrar una solución a este tipo de problemas que se relacionan con los derechos humanos de todos los que sufren esta penuria y de los que pueden llegar a padecer una situación semejante.

También deberá aportar su cuota el órgano judicial. Todos estamos de acuerdo con que hay carencias presupuestarias de los tribunales. Lo sabemos perfectamente en esta Cámara, donde hemos discutido día tras día sobre el magro presupuesto que se les asigna.

Es cierto que existen problemas de infraestructura en el órgano judicial, pero éste también debe poner su empeño para que sus jueces, actuando con toda responsabilidad, dediquen las horas que sean necesarias para encontrar soluciones rápidas que diriman los procesos penales.

Aquí habrá que tomar muy en cuenta que los tribunales deberán ser severamente controlados por el Consejo de la Magistratura a efectos de que, si incurren en inercia o irresponsabilidad, sean juzgados duramente por el *jury* de enjuiciamiento que prevé la nueva Constitución reformada este año.

No quiero entrar en un pormemorizado detalle del articulado porque voy a compartir el tiempo disponible para el miembro informante con el señor vicepresidente de la Comisión de Legislación Penal, el señor diputado Pichetto. De todas maneras insisto en que estamos buscando dar una solución a una de las cuestiones

más delicadas que enfrenta la vida de los pueblos, cual es la protección de la seguridad individual y de la seguridad colectiva. Con esto intentamos acercarnos en forma razonable a una ley de transición que en algún momento llegue a evitar que en la Argentina los procesos penales duren más de un año. Todos los órganos del poder político debemos hacer ese esfuerzo para tener la posibilidad de decir sin euforia, pero también sin ironía, que tenemos la Argentina que merecemos. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: voy a reiterar algunos de los conceptos manifestados por el señor diputado Gauna y agregaré otros, siempre con el propósito de tratar este tema con gran sensibilidad y responsabilidad.

Como otras veces, será el Parlamento argentino el que tendrá que asumir la responsabilidad —para no decir el costo político— por el fracaso o la demora que tiene el Poder Judicial en muchas causas llevadas de acuerdo con el viejo procedimiento escriturario.

En primer lugar, quiero reivindicar la tarea del Parlamento en orden a ir modificando toda la situación penitenciaria y también toda una cultura sobre esta cuestión. Este Parlamento aprobó la ley de la *probation* que significa que los delincuentes primarios, cuando asumen la responsabilidad, tienen la posibilidad de salir en libertad.

Como bien lo ha dicho el señor diputado Gauna, estamos estudiando un proyecto de penas alternativas y venimos hoy a tratar este otro tema, dándole la cara y asumiendo la responsabilidad política que significa una coyuntura de crisis en el sistema penitenciario, que no es nueva y que tampoco es responsabilidad de este gobierno, ya que viene de arrastre, de muchas décadas de ignominias e infamias en las cárceles argentinas.

Estamos convencidos de que hay que mejorar, de que hay que realizar inversiones en infraestructura, y en esto el Estado nacional ya asumió el compromiso de la construcción de dos cárceles nuevas.

Estamos tratando un proyecto que sin duda será cuestionado desde algunos sectores por insuficiente, porque van a querer un plazo más corto para los procesados sin condena. Y seguramente otros sectores lo van a criticar, entendiendo que resulta muy permisivo y agitarán el

fantasma de que muchos procesados van a salir en libertad para volver a delinquir.

Este proyecto ha sido consensuado en la Comisión de Legislación Penal, y es el producto de un intenso trabajo por parte de los integrantes de esta comisión, quienes hemos visitado los establecimientos de Villa Devoto y Caseros.

También hemos conversado con los presos y con las autoridades penitenciarias y del Ministerio de Justicia.

Como decía el señor diputado Gauna, es el proyecto posible. No sé si será el mejor, pero es la iniciativa del consenso. Establecimos un plazo para que ningún procesado permanezca en prisión más de lo que le corresponde; ese tope es el de dos años. Otorgamos la posibilidad al juez de que solicite la ampliación de ese plazo en un año más cuando se trata de causas de gran complejidad, donde por ejemplo hay delitos correspondientes a distintas jurisdicciones.

Por el artículo 2º otorgamos un plazo de seis meses para aquellos supuestos de sentencias que no se encuentran firmes a fin de que, sin que corra riesgo la seguridad colectiva, la Cámara de Apelaciones o la Corte Suprema de Justicia —en el caso de recursos extraordinarios— dicte la sentencia definitiva.

Cuando los abogados introduzcan “chicanas” o medidas dilatorias hemos establecido que el plazo mencionado no sea computado a los fines del otorgamiento de la libertad. Las medidas dilatorias podrán ser opuestas por el Ministerio Público, que debe efectuar un control adecuado de cada uno de los expedientes. En este sentido, creo que estamos actuando con un criterio de prudencia. Se trata de una propuesta de equilibrio.

Incorporamos al proyecto una diferencia sustancial con la iniciativa sancionada por el Senado de la Nación. Entendemos que la norma no configura un mecanismo de libertad automática. Para la comisión es una forma más de la excarcelación, en virtud de la cual el procesado queda sometido al proceso, con todas las medidas cautelares que el juez de la causa va a tomar, como ser la fijación del domicilio, el control periódico de las autoridades y lo prescrito en el artículo 27 bis, que se refiere a las medidas de conducta disciplinaria a las que todo procesado debe someterse estando en libertad y sujeto al proceso penal.

Consideramos que este proyecto tiene como sentido la reglamentación del Pacto de San José de Costa Rica. Es una iniciativa de alcance na-

cional, que debería servir de guía a las provincias en lo que atañe a regular toda esta situación.

Como bien lo ha expresado el señor diputado que me precedió en el uso de la palabra, estamos ante una situación de crisis del servicio penitenciario. Durante más de un año y medio han existido compromisos y promesas. Además, surgió un dato concreto nuevo, como es la incorporación del Pacto de San José de Costa Rica en el texto de la Constitución Nacional que recientemente se ha aprobado.

El plazo de dos años ya está asimilado en orden a la doctrina penal. El anterior Código Procesal Penal ya lo tenía incorporado. No fue sostenido en el nuevo proceso oral, porque los principios de la celeridad, de la inmediatez y de la libre convicción determinan que ninguna causa dure más de un año y medio, tal como está ocurriendo hoy en la Argentina con el nuevo proceso oral.

Entendemos que estamos elaborando una norma que tiene raíz constitucional. También estamos introduciendo principios que ya estaban enunciados en el artículo 18 de la Constitución Nacional y que habían sido recogidos en muchas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, como es el caso Mattei, que sentó precedentes ya en 1968.

Reiteramos que este proyecto presenta consenso. Se trata de una norma posible y de equilibrio. Tiene que ser explicitada y comunicada correctamente, porque en los últimos días se han agitado informaciones totalmente distorsionadas en los medios de comunicación.

Hoy, en un medio importante de comunicación, se expresó que iban a egresar más de mil presos del sistema penitenciario nacional. En base a datos concretos del Ministerio de Justicia puedo informar que el Servicio Penitenciario Federal cuenta con 3 mil presos entre procesados y condenados. Sólo el 10 por ciento, estimativamente, podría estar alcanzado por esta iniciativa que queremos sancionar. Existen 375 internos sin condena con más de dos años de detención, 127 internos con más de tres años de detención sin condena, 54 con más de cuatro años de detención y 52 con más de cinco años de detención. Esto configura una notoria injusticia porque plantea una situación de incertidumbre procesal que de ninguna manera se puede justificar en el marco de la Constitución y las leyes que deben regir los destinos de los argentinos. De este modo alrededor de trescientas personas podrán acceder a la libertad por el vencimiento de los plazos.

En la consideración en particular ampliaremos algunos fundamentos y escucharemos las observaciones que se formulen para luego debatirlas con mayor profundidad. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Molinas. — Señor presidente: en nombre de nuestro grupo adelanto que votaremos por la afirmativa el despacho de la Comisión de Legislación Penal que personalmente he suscitado.

El país vive una hora en que es necesario definir qué se pretende: que existan cárceles sanas y limpias no para castigo sino para corrección, o que se mantenga este sistema de mero reservorio de individuos a la espera de que un día un juez los ponga en libertad o algún fiscal o defensor se ocupe de ellos.

Esta iniciativa no intenta resolver este problema, lo que debería ser el objetivo final, sino que trata de salvar una situación actual derivada en alguna medida de la falta de recursos del Poder Judicial, la inacción o la indiferencia de muchos de sus miembros, que eternizan las causas sin resolverlas, y también el grave problema de aquel que carece de medios para pagar un defensor y debe recurrir al defensor oficial —que a veces pasa un par de años sin visitarlo— o no tiene fondos para pagar una fianza. Reitero que el proyecto en consideración tiene por objeto salvar esta situación transitoria, tendiendo desde luego a mejorar este problema. No es la panacea sino la norma posible, la que hemos podido consensuar en la comisión —logrando un acuerdo casi total—, y que a nuestro juicio constituye un acto de justicia frente a una situación real.

Como Parlamento tratamos de resolver la inacción o la mala acción de otro poder del Estado asumiendo esta actitud ante la opinión pública en el convencimiento de que esta iniciativa puede servir como punto de partida para alcanzar el objetivo final. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: tenía razón el señor diputado Gauna cuando afirmó que ésta no es una norma de coyuntura porque efectivamente existió un trabajo de la Comisión de Legislación Penal que culminó con la elaboración de este dictamen, y varios señores diputados han presentado proyectos sobre este tema que han motivado muchos estudios. No se puede negar que la coyuntura influye lamentablemente sobre el modo de plantearse esta dis-

cusión en el seno de la Honorable Cámara. Así lo han dicho dos de los oradores que me precedieron en el uso de la palabra.

En las cárceles de la República Argentina se están viviendo situaciones que han provocado el afán del poder administrador —responsable de ese régimen— de descomprimirlas. Por lo tanto, hay conversaciones —no me interesa llamarlas “negociaciones”— y existen condiciones que han motivado una expectativa en esos lugares de conmoción en torno de la consideración de este proyecto de ley. De allí que no podamos proclamar que el tratamiento de esta iniciativa sea llevado a cabo de acuerdo con los tiempos y los modos en que debe debatirse una legislación de trascendencia.

Además, encerraría una vana ilusión pensar que con la sanción de este proyecto de ley realmente va a disminuir ese estado de conmoción que sucede en los ámbitos donde las personas están privadas de su libertad.

No son personas que esperan sentencia las que convertido en dirigentes dentro de las cárceles; no son aquellos que están esperando el cómputo de prisiones preventivas los que encabezan las revueltas, los que aprovechan siempre que va a producirse un proceso de cambio en el poder o elecciones generales en el país. Ya vamos a ver en los próximos días —espero con ansia equivocarme— que no es solucionando la situación de trescientas personas —ateniéndome al informe del señor diputado Pichetto— como vamos a lograr que se apacigüen estos ánimos que están levantados por varias razones, algunas de las cuales —hay que reconocerlo— son legítimas.

No me conmueve el argumento del llamado Pacto de San José de Costa Rica ni creo que con respecto a esto exista un nuevo régimen a raíz de la reforma de la Constitución, pues ese acuerdo ya había sido aprobado por el Congreso argentino antes de la reunión de la Convención de Santa Fe. El artículo 31 de la Constitución decía, y ahora expresa lo mismo, que ella, las leyes y los tratados son la ley suprema de la Nación.

No es mi intención abrir una polémica con respecto a la incorporación a la Constitución de algunos tratados, que colocarían a la Argentina entre los países que califican la jerarquía de sus tratados. Pero ahora esto se utiliza como argumento para sancionar un proyecto de ley al que se denomina como reglamentario de un acuerdo. Ello no es así, porque la situación era preexistente y la convención internacional invocada era ley suprema de la Nación, de igual

jerarquía que la Constitución Nacional, con anterioridad a la reforma. Por lo tanto, no encuentro la diferencia que ahora se pretende invocar.

Por otra parte, debemos tener en cuenta lo manifestado por algunos señores diputados que han pronunciado brillantes exposiciones, aunque lamentablemente las he escuchado con cierta dificultad por las razones que motivaron la advertencia de la Presidencia.

Ellos han hecho referencia a las deficiencias que se pueden dar en el Poder Judicial y que afectan a las personas, a la condición humana. Este puede ser uno de los motivos que inciden en las actuales circunstancias, ya que causa horror que durante años haya personas en las cárceles esperando conocer en qué condiciones está su juicio. A veces, pasan tres, cuatro o cinco años sin saber cuál es el veredicto del tribunal.

También se han mencionado las deficiencias administrativas que se registran en las cárceles de nuestro país. Esto no es una novedad para nadie, es un vergüenza nacional. Basta con recorrer los institutos penales de todo el país para darse cuenta de que tenemos un atraso de décadas, porque los gobernantes han privilegiado la obra pública a la luz del día, aquella que se ve y que merece aplausos en lugar de destinar recursos en cuestiones que ahora tanto se menea, pero que se olvidan a la hora de fijar el destino de los recursos.

Nuestro sistema carcelario es totalmente anacrónico. Inclusive las cárceles que se construyeron en los últimos cincuenta años ya fueron realizadas bajo criterios anacrónicos, lo que imposibilita que se cumpla con lo que prescribe la Constitución: la seguridad y la posibilidad de la reinserción en la sociedad de las personas allí alojadas.

Pareciera que con respecto a este problema el Congreso piensa que hay una condición humana que falla en el Poder Judicial y una deplorable administración; pero se lo pretende resolver a través del proyecto de ley que ahora se propone, en lugar de ocuparnos de modificar esas deficiencias. Digo esto tomando como base lo referido por algunos señores diputados, porque entiendo que también el Poder Judicial al ordenar la detención de personas sufre las deficiencias del poder administrador que obliga al juez a mantenerlas en condiciones que no se corresponden con la dignidad humana y, por lo tanto, hacen imposible cumplir con el Pacto de San José de Costa Rica.

Todos los días se registran en las cárceles, comisarías y alcaldías hechos que obligan a las personas a estar sujetas a un trámite penoso y degradante como es el de la privación de la libertad.

No estoy conforme con este proyecto, si bien estoy de acuerdo con el criterio que lo inspira. Coincido en que la situación que se vive es reprochable, pero no estoy de acuerdo con la solución propuesta, que debería ser más profunda y promover la concertación de los poderes públicos para encontrar una respuesta definitiva.

La convención denominada Pacto de San José de Costa Rica no es un régimen normativo preciso. Se trata de pautas que deben ajustarse al contenido de la legislación de cada país; no son normas que se imponen. La pauta según la cual se da libertad a quien no tuvo sentencia en un plazo determinado, reconoce su origen en la necesidad de luchar contra un sistema de prepotencia por parte del Estado.

La mayor prepotencia del Estado es la falta de respuesta. La mayor prepotencia del poder se lleva a cabo cuando no se contesta, cuando un trámite se pone en un cajón y pasan los meses y los años y el interesado ni siquiera recibe la atención del funcionario.

Cuando esa prepotencia se ejerce, la contrapartida consiste justamente en otorgar la libertad a quien sufre esa situación. Pero ésta no es una regla general; no se puede establecer una norma general para todos los casos. Es necesaria una invocación en particular, realizada en cada caso, y el juez, la Cámara o la Corte serán quienes podrán apreciar en cada instancia si se han cumplido las condiciones para dictar una medida de esta naturaleza, es decir, si se verifica el desprecio de la persona humana por no darle respuesta a algo que tiene derecho a esperar.

No se puede sancionar una norma general. A veces los procesos judiciales son muy complejos y la Justicia, a pesar de dar respuesta, de trabajar y de actuar adecuadamente quizá no pueda dictar sentencia en el tiempo previsto. Eso es lo que ha ocurrido en nuestro país hace poco en una causa que ha conmovido a la opinión pública y en la que se determinó la libertad de una persona que de ninguna manera estaba amparada por las pautas antes señaladas y por la invocación del derecho superior.

No deseo fatigar la atención de la Honorable Cámara pero, en síntesis, debo señalar que las pautas generales que rigen el comportamiento en relación con la dignidad humana pueden ser invocadas en cada caso en particular y en modo alguno deben contemplarse en una norma general como ésta, que supone que habiendo transcurrido un determinado plazo en cualquier proceso, sin importar su complejidad, ni la simultaneidad de causas o concursos de delitos, debe disponerse automáticamente la libertad. Creo que eso no es lo que reclama la sociedad argentina en esta materia.

Esta no es la ley posible; hay otra que no podemos alcanzar por la presión de las circunstancias y por ello adelanto mi voto negativo, reservando otras argumentaciones con motivo de la discusión en particular.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. López (A. H.).— Señor presidente: como miembro de la Comisión de Legislación Penal he firmado en disidencia parcial el proyecto. En realidad mi disidencia es prácticamente general, pero estoy de acuerdo con que se fije un término para el lapso de la prisión preventiva.

Esta norma va a regir sobre los individuos con presunción de inocencia y que han sido privados de la libertad al solo efecto de asegurar su comparecencia durante el proceso, y en la seguridad de que si se dicta una sentencia condenatoria ella pueda ser ejecutada.

Teniendo en cuenta el sistema de presunción de inocencia debemos analizar cómo se reglamenta esta norma para que exista un marco de justicia. Debe quedar en claro que no estamos tratando esta iniciativa por el hecho de que el Pacto de San José de Costa Rica se haya incorporado a nuestra Constitución. Si tenemos en cuenta dicho tratado, vemos que se refiere a un individuo que haya sido sentenciado en un plazo razonable; y también establece que no debe existir prisión por deudas. A nadie se le ha ocurrido establecer una legislación en el Parlamento argentino sobre el sistema de prisión por deudas dado que precisamente en nuestro país existen las causas de tratamiento penal para los contribuyentes morosos en materia fiscal.

No nos engañemos: estamos legislando presionados por una situación y esto no me gusta porque debemos hacerlo con ánimo de perdurabilidad y para todo el territorio nacional. Este problema se plantea particularmente por los episodios ocurridos en dos cárceles de la Capital Federal y otras del conurbano bonaerense.

Tengo varias disidencias respecto de esta iniciativa. En primer lugar creo que el plazo de dos años ya es suficientemente excesivo. En este sentido, algunos países europeos han restringido dicho plazo a un año y otros llegaron a reducirlo a tan sólo tres o seis meses para que el juez pueda dictar una sentencia de condena o absolución.

El sistema judicial argentino se ha visto afectado por la desidia de muchos gobiernos que por no haber aprobado los presupuestos adecuados para las cárceles se enfrentaron con estos problemas. Por ello debemos legislar ahora sobre esta necesidad.

De por sí el plazo de dos años es largo; pero ahora resulta que podrá ser extendido por resolución fundada del propio juez de la causa, que puede tener negligencia en el tratamiento y aceleración del proceso, que luego continuará con el ritmo adecuado.

Por lo tanto, con respecto al artículo 1º, creo que en caso de concederse la prórroga del plazo éste no puede extenderse más allá de seis meses. Pregunto a las personas que hayan estado en prisión durante quince días y luego salieron inocentes, qué se siente estar detenido dos años, o tres años y seis meses como lo establece el artículo 2º de la norma y salir absuelto. La cámara debe fijar el plazo como está establecido en la mayoría de la legislación provincial cuando se solicita su extensión. El juez de la causa efectúa tal pedido y se debe controlar si se ha actuado adecuadamente, concediéndoselo o no. Pero en este caso nos podemos encontrar con que para cubrir su propia negligencia, fiscales y jueces dicten resoluciones bien fundadas prorrogando por sí el plazo por el término de un año y después por seis meses más.

Con relación al artículo 2º entiendo que a continuación de la palabra "sentencia" debe agregarse el vocablo "condenatoria".

Sr. Gauna.— ¿Me permite una interrupción señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. López (A. H.).— Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri).— Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gauna.— Señor presidente: quería hacer saber al señor diputado preopinante que con relación al artículo 2º que acaba de mencionar, la comisión ha aceptado la propuesta que dicho legislador ha formulado, y del mismo modo se va a proceder durante la discusión en particular con relación a otros artículos acerca de los cuales también ha propuesto modificaciones. Por esto le sugeriría que durante la discusión en general evite referirse a cuestiones de índole particular en atención a que la mayoría de sus sugerencias han sido aceptadas.

Sr. Presidente (Pierri).— La Presidencia advierte al señor diputado Alcides López que debe referirse al proyecto en general, sin perjuicio de que durante la consideración en particular efectúe las propuestas respecto de los artículos que desee modificar.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. López (A. H.). — Señor presidente: debo señalar que tengo disidencias en varios artículos del proyecto en análisis. Estas habrían sido aprobadas por los firmantes del dictamen, pero con posterioridad a su firma. De allí que las iré reformulando en cada caso en particular, pero quiero dejar sentado que mantengo una disidencia esencial con el dictamen en estudio porque entiendo que la iniciativa afecta las facultades provinciales de legislar en materia procesal.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar en general.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — El proyecto ha sido aprobado con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Aceñolaza. — Quiero dejar constancia de mi voto por la negativa, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — Se tomará debido nota, señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Green. — En el mismo sentido dejo constancia de mi voto por la negativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración en particular el artículo 1º.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gauna. — Señor presidente: en relación con el artículo 1º vamos a proponer un agregado al final de la norma, que de algún modo tiene que ver con la observación formulada por el señor diputado Alcides López. En consecuencia, proponemos que a continuación de "resolución fundada" se agregue la expresión "que deberá comunicarse de inmediato al tribunal de apelación que correspondiese para su debido contralor".

Sr. Albamonte. — Señor presidente: he pedido la palabra al solo efecto de que la Secretaría Parlamentaria tome nota de que cuando el señor miembro informante de la comisión leyó el texto incluyó una modificación al dictamen al decir: "o la evidente complejidad de las causas", refiriéndose luego exclusivamente al agregado del último párrafo.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. López (A. H.). — Señor presidente: coincidentemente con lo que decía al tratarse el proyecto en general, propongo que el artículo 1º

sea modificado agregándose luego del párrafo que dice: "...éste podrá prorrogarse un año más por resolución fundada" la expresión "dictada por la cámara de apelación pertinente".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente: quiero advertir la existencia de un error en la parte final del artículo 1º. Donde dice "éste podrá prorrogarse un año más por resolución fundada", se está refiriendo al proceso; pero lo que puede prorrogarse un año más es la prisión preventiva. En consecuencia, en lugar de decir "éste" debería decir "ésta" para referirse a la prisión preventiva.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿La comisión acepta las modificaciones propuestas por los señores diputados?

Sr. Pichetto. — Señor presidente: la comisión rechaza la propuesta formulada por el señor diputado Alcides López y ratifica el texto que determina la ampliación del plazo por un año en el entendimiento de que existen causas de alta complejidad, delitos cometidos en distintas jurisdicciones y multiplicidad de procesos que hacen necesario que así sea.

Con respecto a lo planteado por el señor diputado Polino, consideramos correcta su propuesta dado que el término que se prolonga es el de la prisión preventiva.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 1º con las modificaciones propuestas por los señores diputados y aceptadas por la comisión.

— Resulta afirmativa, con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sr. Aceñolaza. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Aceñolaza. — Señor presidente: quiero que quede constancia de mi voto negativo en particular respecto de todos los artículos.

Sr. Presidente (Pierri). — Quedará debidamente registrado, señor diputado.

En consideración el artículo 2º.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gauna. — Señor presidente: a propuesta del señor diputado Alcides López se agrega la palabra "condenatoria", de modo tal que el artículo quedaría redactado del siguiente modo: "Los plazos previstos en el artículo precedente serán

prorrogados por seis meses más cuando los mismos se cumpliesen mediando sentencia condenatoria y ésta no se encontrare firme”.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Natale. — Señor presidente: pregunto a la comisión qué se entiende por sentencia que no se encontrare firme. Formulo esta pregunta por lo siguiente: imaginemos una sentencia definitiva del máximo tribunal que tuviese competencia en la causa de apelación. Si se interpone un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, estaría aplicándose el supuesto del artículo 2º y, consecuentemente, no habría sentencia definitiva hasta que se expida la Corte.

Habida cuenta de los tiempos que insumen los fallos de la Corte, apunto la situación vinculada con la previsión del tiempo que se adopte. Si la prórroga es por seis meses en función de una sentencia definitiva ordinaria, la norma parece razonable. Pero si la sentencia ya no es la ordinaria sino la extraordinaria que pudiese provenir de un recurso de esta naturaleza, se me ocurre que los tiempos serían muy perentorios.

Por lo expuesto, pregunto a la comisión lo siguiente: ¿qué se entiende por sentencia firme?

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte. — Señor presidente: quiero realzar una aclaración, porque con este artículo que estamos considerando alcanzaríamos los términos máximos de la duración de la prisión preventiva, y por aplicación del Acuerdo Interamericano de los Derechos Humanos, el procesado quedaría en libertad.

En este sentido hemos tenido largos debates en comisión y, en general, hemos llegado a un acuerdo de casi todos sus integrantes respecto de que cuando un imputado quede en libertad por aplicación del Pacto de San José de Costa Rica, en realidad lo que ocurrirá será un fracaso de la justicia.

Vamos a coincidir en que lo deseable es que nunca se aplique ese pacto y que la justicia sea suficientemente eficiente y tenga celeridad como para poder resolver en tiempo y forma todas las causas. Si ello no ocurriera, y estuviésemos ante un fracaso de la justicia, los miembros de la comisión hemos acordado —y lo queremos transmitir en este momento— que en oportunidad de tratarse el proyecto de ley de creación del Consejo de la Magistratura —que es una figura de la nueva Constitución Nacional— vamos a buscar las fórmulas del caso para que los magis-

trados que no hayan podido resolver las causas en tiempo y forma comuniquen tal circunstancia al Consejo de la Magistratura, explicando las razones por las cuales tuvieron que aplicar el Pacto de San José de Costa Rica.

Es bueno que todo eso quede reflejado en este recinto, a fin de que se conozca cuál ha sido el espíritu del legislador. Insistimos: la aplicación del Pacto de San José de Costa Rica significa, lamentablemente, un fracaso de la justicia.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: voy a responder la inquietud planteada por el señor diputado Natale.

El primer criterio que se adoptó en la comisión con relación a este proyecto consistió en ir fijando plazos a los fines de que se termine con las situaciones de incertidumbre procesal. Es necesario que el Poder Judicial y los jueces ajusten adecuadamente los tiempos para cumplir con sus obligaciones. Si bien hay magistrados honestos y responsables que concurren a los juzgados a las 8 de la mañana y se retiran por la tarde, hay otros que no cumplen su función.

La duda planteada por el señor diputado Natale —que compartimos— se refiere al plazo de los seis meses a los fines de la apelación ante la Cámara de Casación. Es aplicable el plazo a la Cámara de Casación. Las diferencias definitivas provienen en principio del sistema del dos por uno, que hacen a la modificación del artículo 24 del Código Penal que está enunciado en la ley y que tiene como beneficio adicional redefinir la sentencia de la Cámara de Casación determinando una condena menor.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 2º con la modificación propuesta por el señor miembro informante de la comisión.

— Resulta afirmativa, con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 3º.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gauna. — Para el segundo párrafo se propone la siguiente redacción: “En las causas que se inicien a partir de la vigencia de la presente ley, el Ministerio Público solamente podrá formular aquella impugnación si se hubiese opuesto por el carácter dilatorio de la articulación de que se trate, en la oportunidad de tomar conocimiento de la misma”.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 3º con la modificación propuesta por la comisión.

— Resulta afirmativa, con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 4º.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa, con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

— Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 5º y 6º, con el voto de más las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 7º.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Gallo. — Señor presidente: quiero proponer una modificación a este artículo...

— Manifestaciones en las galerías.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia solicita silencio al público asistente a las galerías.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Gallo. — Quiero poner a consideración de la comisión una modificación en lo referente al artículo 7º, que sigue la filosofía tradicional del Código Penal.

Lo que propone la comisión es que transcurrido el plazo de dos años previsto en el artículo 1º se computarán, por cada día de prisión preventiva dos años de prisión o reclusión. Lo que propongo es que por cada día de prisión preventiva se computen dos años de prisión y uno de reclusión. Mi pedido exime de mayores comentarios por cuanto esto apunta a mantener la primitiva redacción del Código Penal.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿La comisión acepta la propuesta del señor diputado Gallo?

Sr. Gauna. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración tiene la palabra la señora diputada por Río Negro.

Sra. Piccinini. — Señor presidente: quisiera preguntar al señor diputado Gallo, respecto de la modificación que acaba de proponer, si se refirió a días o años, porque dijo que por cada día de prisión preventiva, se computarán dos años de prisión o reclusión. ¿Son años o días?

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Gallo. — La sola enunciación de la formulación pone de manifiesto que fue un error de mi expresión.

Por cada día de prisión preventiva se computarán dos de prisión y uno de reclusión, según mi propuesta.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 7º.

— Resulta afirmativa, con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

— Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 8º, con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 9º.

Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. López (A. H.). — Señor presidente: el artículo hace referencia a que la presente ley será de aplicación en todo el territorio de la Nación. Ello afecta la facultad de las provincias para resolver en materia procesal, sobre todo en lo que atañe a los artículos 5º y 6º. Por lo tanto, el artículo debería decir: "La presente ley es reglamentaria del artículo 7º, punto 5º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: aceptamos la propuesta del señor diputado por Entre Ríos en lo que respecta al artículo 9º.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la capital.

Sr. Bravo. — Señor presidente: quisiera que la comisión me informe si queda eliminado del artículo 9º la siguiente expresión: "...y será de aplicación en todo el territorio de la Nación".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: así es; se elimina esa expresión a los fines de no afectar la autonomía provincial en este aspecto. Como todos los señores diputados conocen, se trata de una materia que corresponde a las legislaturas provinciales.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 9º con las modificaciones aceptadas por la comisión.

— Resulta afirmativa, con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 10.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gauna. — Señor presidente: propongo la eliminación del artículo 10.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar la propuesta formulada por el señor diputado por la capital.

— Resulta afirmativa, con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 11 del dictamen, ahora 10.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Gallo. — Señor presidente: desde ya que coincidimos con la filosofía general de esta norma y estamos convencidos de que la duración integra también el debido proceso legal. Por otra parte ya la Corte Suprema sostuvo...

— Manifestaciones en las galerías.

Sr. Presidente (Pierri). — Que el personal de seguridad proceda a desalojar las galerías de inmediato.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Gallo. — Como decía, señor presidente, sin perjuicio de que compartimos la filosofía de esta iniciativa, cabe destacar que nuestra Justicia está en un proceso de adaptación, en particular la Justicia federal luego de la implantación del juicio oral, que pareciera está acelerando notablemente las causas. Es necesaria una readaptación de todo el foro, y una aplicación inmediata de esta norma, sin salvedad, para todos los delitos podría llevar a que quedara en libertad un número verdaderamente importante de procesados por delitos muy graves que no han recibido sentencia por la lentitud de la Justicia, poniéndose inclusive de este modo en riesgo la armonía social.

Todos sabemos que los valores justicia y seguridad se encuentran en tensión en toda legislación, pero en este momento de cambio de la administración de la Justicia penal me parece que sería prudente que durante un tiempo de adaptación esto no sea aplicable a los delitos más graves.

El artículo 11, ahora 10, establece una excepción que, aunque justa, me parece demasiado puntual. ¿Por qué excluir de los beneficios de este proyecto de ley a los delitos más graves en

materia de estupefacientes y no a otros delitos que la legislación penal reprime incluso más severamente?

Por lo expuesto, propongo la inclusión de una norma general por la que se excluyan de los beneficios de esta norma no sólo algunos delitos previstos por la ley 23.737 sino también todos aquellos que en el Código Penal tengan una pena mínima de cinco años.

Me he tomado la libertad de buscar estos delitos en el Código Penal y demoraré a mis pares unos breves instantes enunciándolos, porque me parece que su gravedad justifica la excepción. Ellos son: el homicidio simple (artículo 79), el homicidio agravado (artículo 80), la violación (artículo 119), las violaciones agravadas (artículos 122, 123 y 124), la corrupción agravada (segundo párrafo del artículo 125), los secuestros extorsivos (artículos 142 bis y 170), las torturas (artículo 144 tercero), los robos agravados (artículos 165 y 166), la extorsión (artículo 168), el estrago agravado (artículos 186 inciso 5º y 187), la tenencia de explosivos (artículo 189 bis), el descarrilamiento agravado (inciso 4º del artículo 191), el envenenamiento o adulteración peligrosa de aguas (segundo párrafo del artículo 200), la asociación ilícita agravada (artículo 210 bis) y los atentados contra el orden constitucional (artículos 226 y 227). La sola enumeración de estos delitos pone de manifiesto que, si se hiciera una excepción respecto de la droga o los estupefacientes, bien merecería hacérsela también en relación con los delitos que tienen una pena mínima de cinco años.

Por lo tanto, propongo como redacción definitiva del artículo 11 del proyecto, ahora 10, la siguiente: "Quedan expresamente excluidos de los alcances de la presente ley los imputados por delitos reprimidos con penalidad mínima de cinco o más años de reclusión o prisión".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: vamos a desestimar la propuesta enunciada por el señor diputado Gallo. Sin ninguna duda, el tema que él ha planteado fue debatido largamente en el ámbito de la comisión, donde se analizó la posibilidad de provocar un corte en función de los delitos graves. Esto fue desestimado porque se siguió el criterio típico de la legislación italiana, que solamente plantea el tema en orden a la instrucción, y lo establecido en el Pacto de San José de Costa Rica, que comienza diciendo "Toda persona" sin hacer ningún tipo de calificación de los delitos.

La redacción del artículo 11 del proyecto, ahora 10, tiene como sentido la vigencia de

otra ley de la Nación por la que se ha ratificado el Pacto de Viena, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, donde se establecen términos de prescripción mucho más extensos, y además, sistemas de prisión mucho más rigurosos.

Sostenemos que con la eliminación de esta excepción, que podría llegar a ser discutida en el plano constitucional —en esto coincido con algunos señores diputados—, estaríamos colocándonos en una situación de desconfianza dentro del marco internacional en lo referente al flagelo de la droga.

El proyecto de ley en tratamiento establece dos excepciones: los imputados por el delito previsto en el artículo 7º de la ley 23.737 —que se refiere a la figura del narcotraficante que financia y organiza el tráfico de drogas—, y aquellos a quienes resultaren aplicables las agravantes previstas en el artículo 11 de esa ley. Estas son las únicas excepciones que la comisión ha determinado que permanezcan, repito, a raíz de la vigencia de la ley 24.072, que ha ratificado el Pacto de Viena.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 11 del proyecto de ley, que ha pasado a ser artículo 10.

—Resulta afirmativa, con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

—El artículo 12 del proyecto, ahora 11, es de forma.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda sancionado el proyecto de ley¹.

Se comunicará al Honorable Senado.

Se va a votar si se autoriza una inserción solicitada por el señor diputado Rodríguez Sañudo, cuya solicitud ha hecho llegar a la Presidencia.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda autorizada la inserción peticionada.²

5

AUTORIZACION

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia solicita autorización a la Honorable Cámara para

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 2747.)

² Véase el texto de la inserción en el Apéndice. (Página 2795.)

efectuar las comunicaciones de estilo al Honorable Senado y al Poder Ejecutivo.

Si hubiere asentimiento, se procederá en la forma solicitada.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Pierri). — Se procederá en consecuencia.

6

MOCION DE ORDEN Y MOCION DE SOBRE TABLAS

Sr. Novau. — Pido la palabra para una moción de orden.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — Señor presidente: solicito que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a efectos de considerar sobre tablas dos iniciativas del señor diputado Manfredotti, registradas con los números de expediente 4.436-D.-94 y 4.130-D.-94. Estos proyectos han sido consensuados, y en este momento tienen el carácter de necesidad y urgencia porque están relacionados con el vigésimo quinto aniversario de la creación de la Base "Vicecomodoro Marambio" en la Antártida Argentina, que se cumple el 29 del corriente mes. Hacemos el planteo en el día de hoy por ser esta la última sesión de la Cámara antes de la fecha mencionada.

Uno de los proyectos a los que aludí se refiere a la creación de una comisión de homenaje y reconocimiento a quienes están cumpliendo una misión tan importante y también a quienes fueron pioneros en ese lugar tan inhóspito de nuestro país, que es parte de nuestra soberanía.

La otra iniciativa del señor diputado Manfredotti solicita que la Cámara rinda homenaje a quienes cumplen esta misión valerosa y permanentemente están sufriendo las vicisitudes de las inclemencias climáticas, con lo cual reafirman nuestra soberanía en ese territorio.

Es importante que esta Cámara rinda el mencionado homenaje y, además, que a corto plazo una comisión designada *ad hoc* se traslade hasta ese inhóspito lugar para mostrar al mundo la presencia de este cuerpo legislativo en la Antártida Argentina y, sobre todo, para reafirmar con firmeza, fuerza y patriotismo los derechos que nuestro país se ha ganado sobre los territorios helados de la Antártida. Ese es el

línea de confusión idiomática se emplea el nombre de cheque que identifica claramente a una orden de pago para denominar a un instrumento de crédito. Por mucho que se cambie el nombre, el cheque de pago diferido es y seguirá siendo un instrumento de crédito. Yo no me opongo a su creación. Creo que no es el camino adecuado para aumentar el crédito. Me opongo sí a su registro, ya que creo que el Banco Central deberá recurrir a procedimientos más creativos para conseguir

su objetivo, de conocer el volumen total de endeudamiento de una determinada persona o empresa.

Hay un número significativo de observaciones que realizaremos en el debate en particular una vez que conozcamos el proyecto que en definitiva se va a aprobar, ya que notamos por los discursos que nos precedieron, especialmente los de las bancadas mayoritarias, que se ha alcanzado un "consenso" que habría hecho desaparecer los dictámenes de mayoría y minoría.

6

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO RODRIGUEZ SANUDO

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre libertad por agotamiento de los plazos de la prisión preventiva

No puedo dejar de expresar mi enorme satisfacción en razón de que, más allá de diferencias de criterio, estemos hoy tratando, debatiendo, y —sin duda— llegando a un acuerdo básico en lo que respecta al resguardo de una de las garantías fundamentales del estado de derecho y del derecho penal liberal.

Es principio de inocencia, el reconocimiento indiscutible de que los habitantes de nuestro país deben ser considerados inocentes hasta que una sentencia de condena declare su culpabilidad en el marco de todas las posibilidades defensivas y formalidades republicanas.

El mantenimiento básico de esta garantía y de todas sus consecuencias directas no podía hacerse esperar un solo segundo más.

Quizás estemos ante una de las grandes deudas del gran avance que significó la implementación del juicio oral, e incluso ante un retroceso en relación a la manifestación normativa del plazo máximo de dos años que disponía el Código Procesal Penal de la Nación anterior al vigente, por el juego de los artículos 701 y 379, inciso 6.

Pero creo que es absolutamente necesario, antes de entrar en el análisis del proyecto, establecer a grandes rasgos las características principales del instituto de la prisión preventiva.

Y ello se justifica debido a que hace bastante tiempo que en la opinión pública, en algunos medios de comunicación e, incluso, entre nosotros, legisladores de la Nación, se presentan de manera algo confusa, cuando no directamente equivocada, las características distintivas entre la pena —es decir, la coerción material— y la prisión preventiva —es decir, la coerción procesal—.

A veces, llegando a exigir al instituto sobre el que hoy legislamos, funciones propias de la pena misma.

Pena y prisión preventiva deben ser claramente diferenciadas, en primer lugar, a partir de los propios fines de cada una. En el caso de la prisión preventiva, sus objetivos sólo pueden ser aquellos vinculados con el resguardo de los fines del mismo proceso penal: averiguar la verdad y realizar la acción penal. Y nada tienen que ver aquí aquellos fines preventivos o retributivos adjudicados en forma general a la sanción penal estatal.

Por todo ello, la ciencia del derecho procesal penal universal ha dictaminado, con convicción unánime, que los únicos fundamentos de la prisión preventiva pueden ser —legítimamente— el peligro de la fuga del imputado o el peligro de que éste obstaculice la averiguación de la verdad, debido a que —a diferencia del derecho procesal realizador del derecho privado— no es concebible, por imperio de la garantía constitucional de la defensa en juicio, el juzgamiento en rebeldía, por lo que la ausencia del imputado impide la realización del juicio y anula la efectividad del proceso penal.

Esta concepción, única razonable constitucionalmente, reniega de cualquier atributo sancionatorio del instituto.

Todo el funcionamiento de la prisión preventiva no puede evitar tomar en cuenta, sin embargo, que el imputado todavía es inocente y sobre él rige lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional en cuanto a la limitación estatal de no sancionar hasta tanto una sentencia jurisdiccional declare la culpabilidad.

Ello implica que la legislación procesal es reglamentaria, como muchas veces sucede, de la garantía constitucional de la presunción de inocencia y del juicio previo. Y, como toda reglamentación, no puede desnaturalizar la garantía establecida por el constituyente.

Por eso se hace imperioso establecer los límites del uso de la prisión preventiva.

Límites relativos a la procedencia formal, a la regulación del uso estatal del instituto en forma excepcional y a la proporcionalidad de la medida.

El carácter excepcional de la prisión preventiva surge de la combinación con el derecho general a la libertad ambulatoria establecido en el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental.

En el derecho comparado se tiende con fuerza constante a establecer, en este marco, límites absolutos, nunca superables, al uso por parte del Estado de la medida procesal aquí legislada. Incluso esta exigencia de limitar temporalmente a la prisión preventiva ha adquirido un lugar en las Constituciones de ciertos países, como Italia y España.

Asimismo, la necesidad de una prisión preventiva limitada en el tiempo surge de la duración razonable de la persecución penal, garantía establecida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Asamblea General, ONU, Resolución 2.200 —XXI— 14-12-1966), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San

José de Costa Rica (artículo 8º, número 1) y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 6º, número 1).

En definitiva —nuevamente— estamos ante la necesidad de encontrar un punto razonable de equilibrio entre la protección de los derechos individuales y el resguardo de la eficacia del Estado en la administración de la justicia.

No quisiera utilizar este valioso tiempo para manifestar sólo mi conformidad con esta idea general. Para ello alcanza con recordar que, personalmente, he presentado un proyecto en el mismo sentido político-criminal general, que fue considerado por la Comisión de Legislación Penal al remitir el dictamen que aquí se considera.

La distinción y clarificación hechas precedentemente tienen por objeto fundamentar algunas disidencias con la iniciativa que ha tenido acuerdo en la comisión, fundadas todas ellas en la convicción de que el único derecho que debe ser limitado es la libertad personal y ello en la mínima medida razonable para garantizar un proceso penal eficaz pero respetuoso de las garantías individuales.

En primer lugar, ya en el proyecto de mi autoría se establecía como causal de excarcelación el grave incumplimiento, establecido por el juez, de las condiciones de tratamiento de los presos preventivos que establece el artículo 313 del nuevo Código Procesal Penal; de otro modo, esa norma se transformará con el tiempo en una emocionante declaración de principios, pero sin ninguna vigencia práctica; una verdadera norma imperfecta, incompleta, que no establece consecuencia alguna frente a su incumplimiento.

El dictamen de comisión que se trata aquí tiene, en forma manifiesta, pretensiones de legislar en forma uni-

voca para todo el país. Es por ello que la propuesta recién expresada no podría referirse sólo a un artículo del Código Procesal federal. Sin embargo, nada impide la introducción de un artículo similar que haga mención a temas tan importantes como el alojamiento en establecimientos diferentes a los penados, separación por razones de edad, sexo, educación, antecedentes y naturaleza del delito, asistencia médica, posibilidad de recibir visitas íntimas, uso de los medios de correspondencia, etcétera.

Los últimos acontecimientos han demostrado la necesidad de que el Congreso de la Nación dirija la mirada a estas cuestiones de tanta gravedad. El mismo ministro de Justicia de la Nación ha explicado los planes que, desde ese organismo, se tienen para que el cumplimiento de estos derechos no sea una utopía. Es por ello que desde este recinto, cuando estamos definiendo problemas de la máxima gravedad político criminal, debemos asegurarnos de incentivar y apoyar esa propuesta, asegurando el cumplimiento de las condiciones de tratamiento citadas.

Por otro lado, quiero expresar mi opinión en el sentido favorable a un plazo máximo de duración de la prisión preventiva que nunca supere los dos años y medio, teniendo en cuenta que, cumplidos dos años, la extensión debe ser autorizada por una instancia superior desde el punto de vista jurisdiccional.

Asimismo, esta ley reglamentaria no debería quitar efectividad a las normas procesales provinciales que regulen la prisión preventiva de modo más favorable al imputado.

Por último, cuando en el dictamen de comisión se incluye el establecimiento de la caución, se debería incluir una norma en la cual se obliga al juez de la causa a tomar en cuenta la posibilidad económica del imputado, a efectos de que no se transforme en una verdadera limitación selectiva.